

Crimen organizado en las cárceles chilenas

Autor: Gendarmería de Chile

I. Consideraciones preliminares

Según su Ley Orgánica, Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene *por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley*. Entre sus ámbitos de competencia, están, entre otras, dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos. Además, deberá estar a cargo de la seguridad perimetral de los centros del Servicio Nacional de Menores para la internación provisoria y el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad de los adolescentes por infracción de ley penal; cumplir resoluciones emanadas de autoridad competente, relativas al ingreso y a la libertad de las personas sometidas a su guarda, sin que le corresponda calificar el fundamento, justicia o legalidad de tales requerimientos; y recibir y poner a disposición del tribunal competente los imputados, conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y leyes especiales.

En esencia, su estatura estratégica en la administración del Estado, está dada en su condición de auxiliar de la administración de Justicia, cuyos alcances resultan ser trascendentales y sustantivos en los aspectos de seguridad pública, tanto en los ámbitos de la inserción en el medio social de las personas sujetas a su custodia, como asimismo, su vigilancia y control en cuanto al cumplimiento eficiente y efectivo de las penas, y de la prisión preventiva dispuesta por los Tribunales de Justicia; del control y cumplimiento de las penas sustitutivas, libertades condicionales, y eliminación de antecedentes conforme a lo dispuesto en el Decreto 409 del Ministerio de Justicia.

Al día 30 de abril de 2021, la institución penitenciaria atendía a un total de 39.678 personas reclusas en el sistema cerrado, esto es, condenados e imputados distribuidos en 84 recintos a nivel nacional, incluyendo en la primera condición procesal, a aquéllos derivados a los Centros de Educación y Trabajo en todo Chile; arrestos y salida controlada al medio libre. De ese total, un 82% reconoce haber consumido algún tipo de droga, al momento de ingresar a una cárcel.

SISTEMA	RÉGIMEN	POBLACIÓN PENAL	H	M	TOTAL
SISTEMA CERRADO	RÉGIMEN CONTROL CERRADO	DETENIDOS	14	6	20
		PROCESADOS	10		10
		IMPUTADOS	12.981	1.146	14.127
		CONDENADOS	23.076	1.516	24.592
		TOTAL RÉGIMEN CONTROL CERRADO	36.081	2.668	38.749
	RÉGIMEN CONTROL SEMIABIERTO	CONDENADOS EN CET SEMIABIERTO	558	88	646
		TOTAL RÉGIMEN CONTROL SEMIABIERTO	558	88	646
	RÉGIMEN CONTROL ABIERTO	SALIDA CONTROLADA AL MEDIO LIBRE	211	27	238
		ARRESTO DIURNO	2		2
		ARRESTO NOCTURNO	38	5	43
		TOTAL RÉGIMEN CONTROL ABIERTO	251	32	283
	TOTAL PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD (SISTEMA CERRADO)		36.890	2.788	39.678

(excluye población penal condenada a penas privativas de libertad bajo control en libertad condicional)

Cuadro 1

Del total de la población penal total del Sistema Cerrado, 9.796 reclusos se encuentran vinculados a delitos tipificados en la Ley 20.000 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, lo que constituye el 24,68%.

En cuando a la Libertad Condicional, existe un total vigente de 6.055 personas.

Por otro lado, existe un segmento de personas sujetas al control de Gendarmería en el Sistema Abierto y Postpenitenciario. El primero considera a los condenados a penas sustitutivas (Ley 18.216) y de control de indultos (Ley 21.228), con un total de 44.426 personas; y el segundo, en un sistema Postpenitenciario (Control DL 409, Indulto Conmutativo y Oficina de Diagnóstico Prontuario) que considera un universo de 21.272 personas.

Conforme a lo anterior, la población total atendida por Gendarmería al 30 de abril de 2021, corresponde a 111.431 personas.

Cifrado nuestro análisis en la población penal del sistema cerrado, quienes, producto de la gravedad del delito cometido y al ser un peligro para la sana convivencia social, han sido derivados en prisión preventiva a los establecimientos penitenciarios del citado sistema, o en su efecto, se encuentran cumpliendo condena; equívocamente podría cifrarse la exclusividad de atención en las 39.678 personas, considerando que tal cifra corresponde a una condición estática a la fecha indicada. Existe una circulación dinámica de relevancia, de ingreso de personas al sistema cerrado. Dicha condición se representa en el siguiente Cuadro, considerando la estadística de flujo desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada anualidad:

Población Penal por nacionalidad: La población extranjera en el Sistema Cerrado al 30 de abril de 2021, es de 2.962 internos, lo que corresponde a un 7,46% del total. De dicho segmento, 1.716 se encuentran reclusos por delitos vinculados al Tráfico de drogas, lo que corresponde a un 57,9% del total de extranjeros. Más abajo se indica la población penal por nacionalidad más representativa. Se destaca la evolución de internos de nacionalidad Colombiana, la que constituye la mayor cantidad de extranjeros reclusos, a la fecha observada.

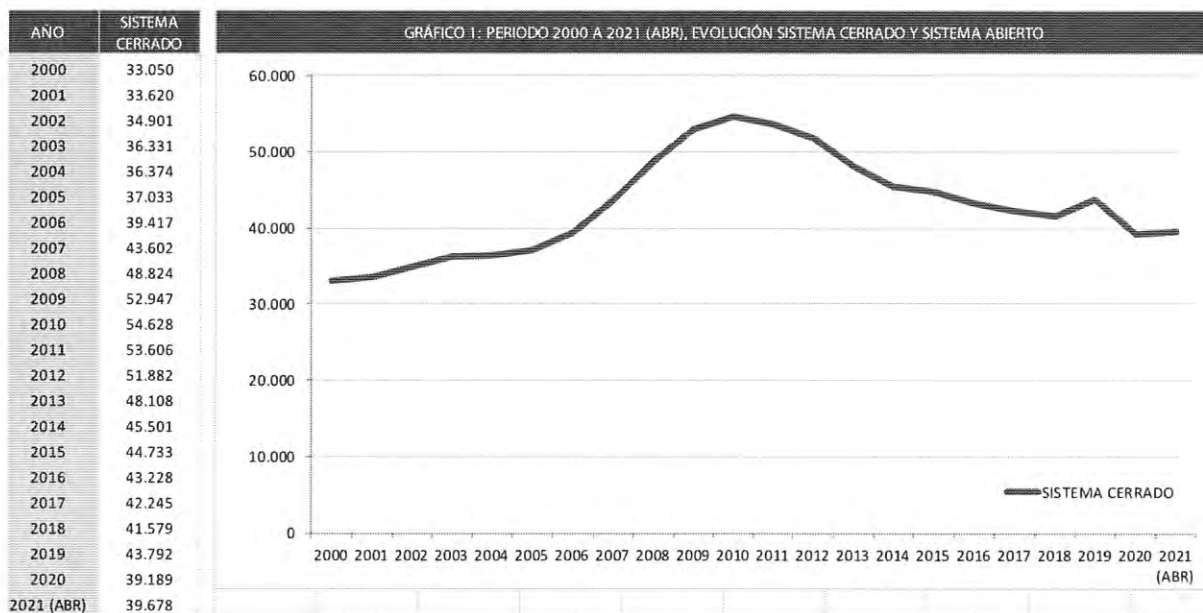
Nacionalidad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Abr)
Colombiana	372	647	751	780	805	892	971
Boliviana	892	1109	1262	1191	1085	625	758
Peruana	470	611	621	576	690	444	483
Venezolana	6	7	16	43	107	192	297
Dominicana	25	46	57	109	145	135	146
Ecuatoriana	38	71	69	83	92	84	92
Argentina	113	93	72	73	64	78	72
Haitiana	2	3	9	16	30	47	58
Paraguaya	35	33	23	13	22	17	13
Cubana	1	2	5	8	7	15	15
Brasileña	20	16	10	10	11	10	11
Española	2	3	5	6	9	6	7
Italiana	4	4	3	7	7	6	7

Cuadro 4

Año	Inicio año	Ingresos año	Flujo anual	Promedio mensual
2012	50.526	83.541	134.067	7.041
2013	49.855	78.306	128.161	6.551
2014	47.257	82.567	129.824	6.881
2015	45.280	81.919	127.199	6.845
2016	44.624	84.938	129.562	7.079
2017	43.147	85.439	128.586	7.120
2018	42.162	81.659	123.821	6.809
2019	41.618	76.715	118.333	6.393
2020	43.165	39.039	82.204	3.277

Cuadro 2

Respecto a la evolución de la población penal, se muestra el siguiente Cuadro, que considera el periodo años 2000-2021 (Abril):



Cuadro 3

La cantidad de homicidios (Riña/Agresión) aumentó sustancialmente durante el año 2020, sufriendo un incremento cercano al 75% respecto a los últimos tres años, considerando el flujo anual de población penal señalada anteriormente (Cuadro 2).

Total de fallecidos sistema cerrado por tipo de causa. Año 2016 a 2020						
Causa	2016	2017	2018	2019	2020	Total general
Accidente	1	2	4	2	1	10
Enfermedad	63	43	51	53	63	273
Incendio	0	0	0	0	0	0
Intento de fuga	0	0	0	0	0	0
Intoxicacion	1	0	1	3	0	5
Otras causas	6	8	7	4	8	33
Riña/agresion	51	48	42	44	61	246
Suicidio	15	11	9	12	26	73
Total general	137	112	114	118	159	640

Cuadro 5

En cuanto a la incautación y hallazgo de elementos prohibidos, se indica en el próximo gráfico, hallazgos de teléfonos celulares y sustancias psicotrópicas sancionadas en la Ley 20.000:

Año	Telefonos celulares	Cannabis sativa Gramos neto	Clorhidrato de cocaína Gramos neto	Pasta base de cocaína Gramos neto
2016	26.462	49.013	4.091	27.578
2017	26.366	48.341	9.303	33.467
2018	26.069	55.188	15.016	41.994
2019	27.437	51.809	18.607	57.178
2020	15.399	112.414	14.186	64.316

Cuadro 6

II. Gendarmería de Chile en el ejercicio del Poder Público

El Poder Público, está conceptualizado como la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado; y que se traduce en un establecimiento de reglas que impliquen la sana convivencia de sus componentes, y por ende, el bien común y el alcance de la paz social en un estado de derecho propio de las naciones democráticas.

Esta capacidad, que en parte es el monopolio del Estado del uso de la fuerza para condicionar el actuar de otro, y en lo que nos interesa, aquéllos que han sido condenados o detenidos por la comisión de un delito, se ejecuta a través de los Poderes que lo conforman y los órganos e instituciones de la administración de Estado, entre las que se encuentra Gendarmería de Chile, cuya naturaleza y fines están contempladas en su Ley Orgánica.

Podría desprenderse –equivocamente- de lo sancionado en el citado cuerpo legal, que la naturaleza y función sustancial de Gendarmería, está vinculada exclusivamente a coadyuvar a la inserción social de los reclusos y en dar eficacia el derecho, en cuanto a cumplir las órdenes emanadas de los Tribunales de Justicia y mantener a resguardo a los privados de libertad que han cometido delitos que han sido susceptibles de ser sancionados con dicha privación, y que por lo tanto, la esencia del acto delictual, implica un grave peligro para la sana convivencia social. En este sentido, los imputados en prisión preventiva -medida cautelar más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico- y los condenados, son derivados a establecimientos penitenciarios del sistema cerrado, vale decir, cárceles tradicionales o bajo la modalidad concesionada, cuyo perímetro se encuentra resguardado con personal armado, y autorizado para el uso de dichas armas de fuego en caso de intentos de evasión, y elementos y equipamientos de disuasión, en caso de eventos críticos.

Mientras que la función de Gendarmería pudiera estar subsumida exclusivamente a lo que sanciona su Ley Orgánica “y las demás funciones que le señale la ley”, resulta evidente que otros productos estratégicos se correlacionan. No solo cautelar la privación de libertad de los infractores, sino que, por un lado, ser auxiliares del Ministerio Público en cuanto a la investigación de hechos constitutivos de delitos en los establecimientos penitenciarios; y por otro, la generación de productos informativos también de orden estratégico, que conlleven

a la propuesta y ejecución de políticas públicas, tales como la iniciativa de georreferenciar a la población penal respecto a sus lugares de procedencia y generar redes de apoyo para quienes presentan menor riesgo de reincidencia y hayan optado a ser parte de programas de intervención y de reinserción institucional; y por cierto, y de manera también determinante, la labor de inteligencia penitenciaria y de investigación criminal de delitos vinculantes al crimen organizado, en coordinación con el resto de las Instituciones Policiales; más la conformación de iniciativas muy relevantes, tales como las Unidades de Coordinación Estratégica (Macrozonas).

Ahora bien, la capacidad de acción de las organizaciones criminales, principalmente asociadas al narcotráfico, no queda anulada al momento del ingreso de sus componentes a los establecimientos penitenciarios. Recurren a diversas estrategias operativas con el objeto de continuar el negocio ilícito: De reclutamiento, control territorial, la intimidación y la extorsión, el homicidio, uso de elementos tecnológicos o correos humanos, mensajes convenidos o encriptados, entre otros. Por otro lado, resulta extremadamente complejo, que esta necesidad de control barrial generado desde la cárcel, también implique la incorporación de otros sujetos a la organización, cuestión que se grafica en acciones tanto fuera, como al interior de los recintos penitenciarios.

Se desprende de lo anterior, que la acción de Gendarmería -al igual que las Instituciones de Orden y seguridad- también está en dar eficacia al derecho, no solo en cuanto a mantener reclusos a los sujetos, cuestión que por lo demás cumple en términos de alta eficiencia, sino que también dicha gestión está dada por la necesaria participación en las indagatorias, alertas, denuncias y estudios de estos fenómenos; contribuyendo significativamente al orden público y a la seguridad pública interior.

Esta lógica imperante, permite sostener que las condiciones de reclusión y el ejercicio del Poder Público delegado en Gendarmería, se ejecuta principalmente en los establecimientos penitenciarios del Subsistema Cerrado, en donde el perfil de ingreso de detenidos y aquellos que cumplen condena, sostiene una diferencia sustancial de aquellos imputados sujetos a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, o en su efecto, sujetos a penas alternativas o sustitutivas a la reclusión, con controles de baja intensidad, sin mayores restricciones que aquéllas que le imponga dicha pena.

III. Crimen Organizado en las Cárceles Chilenas

Contexto general

La criminalidad organizada transnacional es uno de los mayores problemas o desafíos que enfrenta Latinoamérica, ya sea por las altas tasas de homicidios y de delitos violentos, así como por los elevados niveles de temor que permean la vida cotidiana de un número importante de ciudadanos en el hemisferio. Se trata de un fenómeno complejo y multicausal que afecta a la sociedad en su conjunto, generando altos costos económicos, políticos y culturales; donde lejos de encontrar una solución al problema, pareciera ser que los eventos están creciendo, y con ello aumentando la percepción de vulnerabilidad de las personas de ser víctimas de un delito o acción violenta (Dammert & Zúñiga, 2008)²⁰.

Como contraparte de esta dinámica delictual, el Estado de Chile, a través de distintas institucionalidades, las cuales por cierto están en constante perfeccionamiento y adaptación frente al dinamismo de este flagelo, ejecuta día a día una serie de acciones tendientes a contrarrestar la proliferación de la criminalidad en cada una de sus expresiones, y con esto, garantizar el Estado de Derecho y la Seguridad Interior del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, pareciera ser que el garantizar el orden público y la seguridad pública interior, se cumple con la mera detención de los infractores de la ley y el *desbaratamiento de bandas organizadas*, y con el solo hecho de ingresar en diversa calidad procesal –imputado o condenado– a un establecimiento penitenciario. Sin embargo, en cuanto al ingreso a un recinto penal por resolución judicial de estos infractores de ley que son consideradas un peligro para la sociedad o vinculados a delitos por asociación ilícita o que se desarrollan bajo una estructura delictual; existe distinta evidencia que da cuenta que esta persona privada de libertad sigue vinculada de manera constante y permanente al submundo delictual.

Esta criminalidad organizada, sitúa a Gendarmería de Chile en un contexto de particular relevancia en el circuito de seguridad pública al momento de enfrentarla. La detención de avezados delincuentes, el posterior ingreso al sistema penal de organizaciones delictuales, y una serie de factores y características propias de la delincuencia estructurada, ha confirmado la existencia del Crimen Organizado en Chile, organizaciones criminales asociadas

²⁰ Dammert, L., & Zúñiga, L. (2008). *La cárcel: problemas y desafíos para las Américas*. FLACSO-Chile.

principalmente al tráfico ilícito de drogas, la tenencia ilegal y uso de armas de fuego convencionales o modificadas para el efecto, contrabando, secuestros extorsivos, sicariato, la trata de personas y otros delitos vinculantes. Dichos fenómenos, por cierto no exclusivos de nuestro país, y en prospectiva, se traducen en delitos transnacionales no de la envergadura de otras latitudes, pero con potenciales riesgos de activación a escala; han trastocado y aumentado los niveles de corrupción de funcionarios del Estado, tanto policiales y penitenciarios, sumándose a ello, el aumento sustancial de las coordinaciones de las mismas organizaciones delictuales, para continuar perpetrando ilícitos desde el interior de los recintos penitenciarios, ya sea a través del uso de medios tecnológicos de comunicación (celulares, internet), o utilizando verdaderos correos humanos reclutados para el efecto. También resulta indudable que la persecución penal de estos delitos, ha tenido también su impacto en el sistema penitenciario, ingresando a la Cárcel internos de alto compromiso delictual, con un incremento relevante de población penal extranjera vinculada a ilícitos de connotación y que han asumido ciertos liderazgos en la actividad delictual, ya sea por sus redes delictuales, violencia, sicariato, u otros elementos doctrinarios de la cultura criminal organizada.

Esta realidad imperante, se ha comprobado no solo en los eventos críticos que ha enfrentado el sistema penitenciario durante el último tiempo, sino que se evidencia también en el desarrollo de actividades ilícitas que pueden visualizarse a través de las denuncias realizadas por las unidades penales (tráfico y microtráfico de drogas, extorsión, cohecho y soborno, agresiones con resultado de muerte, entre otras).

En el contexto planteado, resulta inevitable observar el fenómeno delictual, con la llegada del Covid-19 a las cárceles chilenas, la que tuvo como antesala una serie de experiencias complejas de Penales en el extranjero, con fugas masivas de internos en Italia, Brasil, Venezuela, Colombia -incluso con internos y agentes penitenciarios fallecidos- más otros hechos altamente complejos en las Cárceles de Ecuador. El caso particular de Italia, país que mantiene altos estándares de seguridad de las cárceles, resulta digno de analizar, más aún, cuando a pesar del emplazamiento de barreras físicas y uso de altas tecnológicas de seguridad, de igual forma éstas fueron sorteadas, propiciándose fugas con evidente afectación a la seguridad pública.

Visualizado este escenario, y en una suerte de aprendizaje de tales experiencias, la acción concertada de imputados reclusos en el Centro de detención Preventiva de Santiago 1, implicó un intento de fuga masiva de poco más de dos mil internos de esta unidad penal, hecho acaecido el día 19 de marzo de 2020.

En este sentido, el 18 de marzo de ese año, se recepcionó información de inteligencia asociada a una eventual planificación de fuga masiva que se estaba concertando al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, instrumentalizada por internos líderes altamente conflictivos, quienes utilizaron el subterfugio que el intento de evasión se debía a la presencia de Covid-19 en la unidad penal, en circunstancias que aún no se declaraba ningún contagio. En el transcurso de la noche de ese día, y a través de fuentes de información de Gendarmería, se tuvo acceso a una serie de audios y fotografías extraídos de un “grupo” de imputados de la red social WhatsApp, todos pertenecientes al Penal. También se incorporaron en dichas comunicaciones, fotografías de sectores aledaños al establecimiento penitenciario, rutas de escape, y otros antecedentes que daban altos grados de certeza de la efectividad de dicha planificación. Los mismos antecedentes, daban cuenta del uso de armas blancas de confección artesanal, pretendiendo someter a personal de servicio de trato directo con la población penal de Gendarmería de Chile, tomándolos de rehén para de esta forma tomar el control del establecimiento. Se consideraba, una vez alcanzado el control interno, y con ayuda del exterior; bloquear algunas calles colindantes al recinto penal, con quemas de vehículos y “lanzamiento” de armas de fuego al interior de la Cárcel. Además, dentro de la misma planificación, se indicaba la búsqueda y uso de un vehículo de alto tonelaje (camión, retroexcavadora, y/o bus de la locomoción colectiva), con el cual impactarían el muro perimetral, fracturándolo para emprender la huida, incluso con explosivos. Dicha planificación se consideraba concretarla a las 13:30 horas del día 19 de marzo de 2020.

Dado los altos grados de certeza de la información, se dispuso la denuncia al Ministerio Público y una intervención operativa del establecimiento, extrayendo a primera hora del 19 de marzo, a imputados vinculados a la planificación. Se realizó un allanamiento preventivo a sectores de la unidad penal de mayor riesgo, además del refuerzo de personal especializado (Grupo antimotines, equipos de operaciones tácticas, y otros no pertenecientes a la dotación de la unidad penal), además de rondas preventivas y fijación de puntos estratégicos y vulnerables del Penal. Además, se realizaron coordinaciones con las Policías, quienes se ubicaron en el exterior del recinto, para efectos de neutralizar cualquier apoyo externo.

A pesar de todas las medidas preventivas adoptadas, y tal como estaba planificado por la población penal, siendo las 13:30 horas, un número significativo de internos atacaron al personal, sorteando los primeros anillos de seguridad, generándose acciones coordinadas de más de dos mil imputados de distintos módulos, para propiciar la evasión masiva, la que fue finalmente repelida y contrarrestada por la acción del personal.

Este evento, ha marcado un antes y un después en la actividad penitenciaria. Nunca antes, internos con ese nivel de planificación y concertación habían desafiado el sistema penitenciario, independiente de todas las medidas preliminares adoptadas por Gendarmería para abortarlo.

Las coordinaciones previas, el alto poder adquisitivo de un segmento de la población penal, la instrumentalización del Covid-19 instalada en los reclusos más débiles por parte de los más “poderosos”, y la utilización de los primeros para ejecutar la fuga masiva; es una muestra evidente de una mutación de una delincuencia tradicional, pasando a una especie de narcodelincuencia, la que cuenta con redes delictuales de apoyo externo, dispuestos a enfrentar la fuerza policial, que para efectos de este evento, se encontraban debidamente apostados como apoyo en el exterior del recinto.

Posterior a este evento, diversas informaciones de inteligencia, lanzamiento de elementos prohibidos desde el exterior, llamadas anónimas, entre otras; alertaron probables fugas masivas de otros recintos penitenciarios, tales como el Complejo Penitenciario de Rancagua, hallazgo de elementos explosivos en el Complejo Penitenciario de La Serena, más otros antecedentes de concertación de eventos simultáneos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina 1 y 2, Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (Ex Penitenciaría), Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, y el mismo Centro de Detención Preventiva Santiago 1; disponiéndose de acciones de intervención y refuerzo operativo, coordinación policial; y el traslado de internos altamente conflictivos, potenciales financistas, y que ofrecieran mayor riesgo conforme a su historial, informaciones y ejercicio de poder o liderazgo negativo en el resto de los internos.

En todo este escenario, la respuesta de la Institución Penitenciaria, para enfrentar la *operación* delictual y sus efectos, se ha visto fortalecida a través de la creación en marzo de 2019 del Departamento de Inteligencia Penitenciaria y del Departamento de Investigación Criminal. Este último, como contraparte del Ministerio Público y del resto de las instituciones policiales, más las instancias de colaboración táctica-operacional de las Oficinas de Seguridad Interna (OSI) de los Establecimientos Penitenciarios, y la puesta en marcha de manera progresiva, de Unidades Regionales de Investigación Criminal y de Inteligencia Penitenciaria. Todo ello, con el objeto de hacer más oportuna y eficiente la prevención y la indagatoria de los ilícitos que ocurran al interior de los recintos penitenciarios, o que tengan su principio de ejecución en ellos. No obstante lo anterior, alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia esperados en cuanto al control de la operación de las organizaciones delictuales, no solo tiene relación con la autogestión estructural de Gendarmería, sino que también, con los necesarios recursos tecnológicos, de infraestructura física, y otros de especial relevancia.

Sociedad, Cárcel y Crimen Organizado

El sistema penitenciario no es un sistema disociado del entorno social en el que se encuentra inmerso. Por el contrario, es un eslabón más en la cadena de la seguridad pública, y como tal, lejos de ser impermeable a lo que sucede en el medio libre, se ve inevitablemente afectado por la contingencia social, de una forma cada vez más evidente y peligrosa.

Un ejemplo claro de esa *permeabilidad* entre el medio libre y el mundo penitenciario lo constituye el aumento en el número de homicidios ocurrido en nuestro país durante el año 2020, año en el que alcanza un *peak* inédito que refleja un aumento del 46% en los últimos 5 años, según informa el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros. Como era de prever, lo propio ocurrió en las cárceles: durante el año 2020 el número de homicidios perpetrados al interior de estos recintos aumentó casi un 75% respecto a los últimos 4 años, considerando el flujo de población penal anual.

Una mirada diacrónica del fenómeno, evidencia que el aumento en las cifras de homicidios se acompaña de un cambio en la *dinámica delictiva* respecto a lo que se conocía, pues en nuestro país, por lo general los homicidios solían ocurrir entre personas que se conocían entre sí, y eran marginales aquellos casos en que el victimario no tuviera relación con la víctima. Se trataba de acciones esencialmente personales o simplemente fortuitas. Sin embargo, a contar del año 2020 irrumpen con fuerza, y anunciándose incluso con fuegos artificiales para asegurarse que toda la ciudad se enterara, nuevos actores criminales que, muy lejos de ser delincuentes solitarios, se organizan a través de bandas para ejercer el crimen organizado.

No se trata de un fenómeno del que no se tuviera noticia, pues dio sus primeras señales de forma “tímida” hace ya algunos años. Lo notable y relevante, es que pareciera ser que el año 2020 estas bandas decidieron “normalizar” su existencia en el país, reclamando un lugar en el tejido social, que creen pertenecerles. El mensaje que se percibe es: “*Estamos aquí y estamos aquí para quedarnos*”.

Ya seleccionaron cuidadosamente aquellos lugares o “*territorios*” en el que se instalaron: barrios con la menor presencia posible del Estado, donde no resultara difícil generar una suerte de *estado* alternativo o paralelo.

La compleja presencia del Estado en esos territorios, generó el sustrato propicio para que este nuevo actor social se infiltrara profundamente en ellos y comenzara a ejercer control sobre el territorio, estableciendo nuevas reglas de convivencia, donde el uso de la violencia es naturalizado como un método legítimo para resolver conflictos.

El ejercicio de la violencia es inédito en la historia criminal chilena. Son capaces de enfrentarse a *tiros* en la vía pública, a plena luz del día, incluso disparando hacia la muchedumbre, sin tener la menor consideración por la vida de un ser humano; se trate de un anciano, una mujer embarazada o se trate de niños. Simplemente no les importa, mientras la acción violenta sirva para acrecentar su poder.

Este ejercicio permanente de la violencia, es matizado por una suerte de conducta *filantrópica* y casi *mesianica* de estas organizaciones delictuales que sólo puede confundir a la población. Al tiempo que intimidan y coaccionan física y psicológicamente a los habitantes, *invierten* en la comunidad, y comienzan a resolver parte de las necesidades de los pobladores -pagando remedios, tratamientos médicos, alimentos o funerales- a cambio de *fideli-*
dad; esto es, silencio, complicidad y *trabajo delictual*. De esta forma consiguen ser temidos, respetados, e incluso con el tiempo, posiblemente admirados y queridos por su entorno no antagónico; facilitándose los mecanismos de reclutamiento, sobre la base de la búsqueda de *status* de los potenciales componentes de la organización.

Dominado el territorio, ya se encuentran en condiciones de conquistar nuevos espacios donde expandir su hegemonía sobre la gente y su poder económico; generándose verdaderas pugnas y luchas sobre el territorio, con uso de armas de fuego y el consecuente resultado de muerte de delincuentes adversarios.

Dada su estructura u organización interna, destinada en esencia a perpetuarse, no resulta posible asumir que el mero hecho de la detención e ingreso a las cárceles de alguno de sus miembros destacados o líderes, e incluso tras una posterior condena a años de prisión; suponga que la organización quede desarticulada y sus integrantes neutralizados, pues los muros de la prisión no son impermeables al medio libre. Por el contrario. Con la reclusión en los recintos penitenciarios de personas vinculadas a las bandas criminales y crimen organizado, ingresan, además, su forma de vida, métodos delictuales y disputas territoriales por la venta de drogas ilícitas, contrabando, clonación de vehículos, tráfico de personas con fines de explotación sexual, entre otras, comenzando a reproducirse las dinámicas delictuales del medio libre en los establecimientos penales, generando una transformación en la cultura carcelaria, incluso, con la perpetración y coordinación de delitos desde los mismos recintos penitenciarios.

Estos líderes ya trasladaron su “*sistema de dominación*” al interior de las cárceles, haciendo uso de su poder económico y fáctico a través del sometimiento de los más débiles, para conquistar este nuevo territorio empobrecido que es también la cárcel, donde la infraestructura no está al servicio de la seguridad y la reinserción. No existe disponibilidad de segregar, como se requiere, a perfiles criminales más complejos, lo que en parte se podría reflejar en el aumento del número de homicidios ocurridos en las unidades carcelarias.

Ahora bien, con la reclusión de líderes de bandas organizadas a lo largo de nuestro país, las cárceles se van transformando en verdaderos y potenciales *Centros de Negocios* que planifican, determinan logística, reclutamiento y conducción operativa de toda clase de actividades ilícitas propias de las organizaciones criminales que se desarrollan dentro y fuera de la cárcel.

Los más débiles -los otrora denominados “*perkins*” o “*soldados*”- son llamados hoy “*perros*” por estos sujetos. Son sometidos a través del miedo hasta quebrantar su voluntad, momento a partir del cual actúan en lo que les sea mandado, una vez que entienden que su sobrevivencia está supeditada a la obediencia al más fuerte. Ya no sólo son los encargados de asumir la responsabilidad sobre la ocurrencia de delitos mandados por estos líderes al interior de la cárcel -homicidios, tráfico de drogas, entre otros-, sino que también son mandados a participar activamente en enfrentamientos violentos entre bandas rivales en estos recintos y atentar contra la vida de funcionarios. Asumen la *custodia y vigilancia* de entrada a una Galería o Módulo, tanto en la protección y alerta ante la probabilidad de bandas rivales que pretendan *atentar* en contra de la agrupación delictual, o en su efecto, anunciar la intervención operativa penitenciaria de un allanamiento. Son los encargados de recoger el “*pelotazo*” de droga o un elemento prohibido lanzado desde el exterior, de *representar* a la banda criminal y sus líderes en las reyertas que se generan en la búsqueda del control del negocio, incluso asumiendo el riesgo de la muerte o de provocarla en sus contendores; independiente de la amenaza de un nuevo proceso por los delitos que se desprenden de sus acciones.

El sistema y la forma de vida, es exactamente el mismo que ya usaron en el barrio: reclutar, intimidar y matar, a cambio de otorgar protección -una necesidad básica esencial en una cárcel -, todo ello en orden a dominar y expandir su poder económico.

Las bandas delictuales organizadas y sus líderes, a través del control sobre los más débiles, ya cuentan con un sistema de vida intrapenitenciaria que les permite mantener un *status* de privilegios que hace posible que sigan desarrollando y acrecentando sus *negocios* en el medio libre, al tiempo que aumenta su prestigio por sobrevivir a una experiencia carcelaria

sin someterse a ella. Pretenden *dominar* la cárcel, incrementando de esta forma su poder sobre el medio. Así, la condena pasa a ser considerada un mero episodio en su vida “*profesional*” delictiva, que incluso desde una óptica de la subcultura delictual, les otorga prestigio, credibilidad y confiabilidad para el desarrollo de nuevos acuerdos.

Con el poder adquirido a costa del sometimiento del más débil y las probabilidades de corromper a funcionarios –no solo penitenciarios, sino que agentes del estado de otros órganos o instituciones-, el líder de una banda organizada no evidencia interés en insertarse pro-socialmente en la comunidad. Estando en la Cárcel, no tiene interés en cambiar su estilo de vida, más aún, si en nuestro país, las acciones de Reinserción Social ofrecidas por Gendarmería de Chile tienen el carácter de voluntarias.

Por otra parte, ¿qué sucede con los más débiles? ¿Con los sometidos, los *perkins*, los *perros*, como ellos mismos les llaman? Mientras se mantengan bajo la influencia de los líderes o quienes ejercen el poder, no tienen ninguna posibilidad real de reinsertarse -o derechamente de insertarse- pues aquello supondría traicionar al líder y sufrir las consecuencias violentas que traspasan los límites de la cárcel y se extienden a sus barrios y sus familias. Por lo demás, el más débil tendrá que regresar inevitablemente a su barrio de origen cuando termine su condena. ¿Cómo podría sobrevivir ahí, luego de tomar la decisión de cambiar de vida en contra de los intereses de las bandas que controlan aquello que se hace o no en su barrio? En un sistema de dominación como el que ejercen estas bandas organizadas, esa decisión no le pertenece al más débil, aun cuando experimente la necesidad de cambiar de vida.

Un ejemplo clarísimo de lo hasta aquí señalado lo constituye el resultado de la intervención –denominada “Operación Bisagra”– que Gendarmería desarrolló el 26 de abril de 2019 en el Módulo 2 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina 2, dependencia que albergaba a miembros de bandas delictuales de alta peligrosidad, principalmente asociadas al narcotráfico, y que habían instalado un verdadero *Centro de Operaciones* para el tráfico interno y coordinación de delitos hacia el exterior, utilizando medios tecnológicos y *correos humanos*. La decisión de la administración de hacer frente al fenómeno implicó el traslado de líderes narcos a diversos recintos penitenciarios a nivel nacional, con mayores estándares de seguridad.

El fenómeno del que se da cuenta se sigue instalando día a día tanto en barrios como en las cárceles de nuestro país, por lo que resulta preciso actuar de forma que no se siga desarrollando, complejizando y naturalizando en nuestras Unidades Penales, impidiendo u obstaculizando las posibilidades de reinserción social de la población penal en su conjunto.

Identificación de Bandas Criminales en el sistema penitenciario Chileno

Gendarmería de Chile ha realizado un trabajo permanente de identificación de bandas criminales recluidas en los establecimientos penitenciarios del Sistema Cerrado a nivel nacional, cuya aproximación se sustenta en diversas fuentes de información, tanto internas como externas.

No obstante lo anterior, y dada la necesidad de establecer estándares de identificación de bandas criminales de mayor objetividad, se encuentran en desarrollo diversas iniciativas, con el objeto de definir criterios más técnicos en la identificación oportuna de tales organizaciones. Entre ellas se destacan:

- Trabajo desarrollado por diversas áreas institucionales, con profesionales del Departamento de Control Penitenciario, Investigación Criminal e Inteligencia, Subdirección de Reinserción Social; que permita definir aspectos conceptuales sobre la criminalidad organizada (bandas criminales, asociaciones delictuales, asociaciones criminales), perfiles y estructuras; en sintonía con la identificación de actores para ser considerados en un modelo diferenciado de reclusión.
- Creación de una Unidad de Estadística y Análisis Criminal del nivel estratégico, que permita sistematizar los datos –muchas veces dispersos– y transformarlos en información útil.

Al 30 de abril de 2021, se han identificado un total de **570 bandas criminales** recluidas en los recintos penitenciarios a nivel nacional, que considera un total de **1936** integrantes, de ellos, **1534** chilenos y **402** extranjeros (de estos últimos, **144** corresponden a internos de nacionalidad colombiana, que constituye la mayor presencia de extranjeros).

Dichas Bandas Criminales mantienen a lo menos un integrante recluido, sea condenado o en prisión preventiva. Dado que el concepto aceptado respecto a la conformación de una banda criminal considera a lo menos dos integrantes o más, es preciso señalar que algunos de sus componentes eventualmente estuvieron en prisión preventiva y luego hubo modificación a la medida cautelar por una menos gravosa, o simplemente no se perseveró en la persecución penal. Por otro lado, también es probable que determinados imputados nunca hayan ingresado al sistema penitenciario, manteniéndose con otras diversas medidas cautelares.

El siguiente Cuadro, muestra la distinción por delito de las Bandas Criminales recluidas:

Delito de la banda	Total
Ley 20.000	392
Robos	116
Ley control de armas	26
Asociación ilícita	7
Secuestro	7
Homicidio	6
Trafico de personas	5
Estafas	3
Receptación	3
Falsificación de instrumento público	1
Ataque incendiario	1
Fraude al fisco	1
Fabricación y elaboración de monedas y billetes falsos	1
Amenazas	1
Total	570

Cuadro 7

Realizada una aproximación a los perfiles y antecedentes de Inteligencia de las Bandas e integrantes indicados, se han identificado **212 sujetos líderes o jefes de bandas recluidos a nivel nacional**, de los cuales, **138** son imputados y **74** condenados; **193** hombres y **19** mujeres.

Dentro de los perfiles destacados de líderes de Bandas, más allá del delito asociado, se pueden considerar las siguientes variables:

- Sujetos multi reincidentes en delitos.
- Promedio de edad:

Rango de edad	Total
18 – 24 Años	13
25 – 30 Años	35
31 – 40 Años	86
41 – 50 Años	52
51 – 60 Años	21
61 – 70 Años	4
71 y más	1
Total	212

Cuadro 8

- El delito predominante es el de tráfico de drogas (Ley 20.000), con **147** sujetos y el delito de robo con **42** sujetos identificados, mientras **23** de ellos están vinculados a otros delitos.
- La nacionalidad predominante es la chilena, sin embargo, y como se indicó, se destaca la incursión de sujetos de nacionalidad colombiana.
- La gran mayoría de los sujetos se caracteriza por presentar “Buena” o “Muy Buena Conducta”, cuestión que se debe a la utilización de internos sometidos al “mando” de los “jefes”, tanto en el tráfico de drogas interno, la posesión de elementos prohibidos por la administración penitenciaria, y al hacer frente en calidad de “soldados” o “perros”, ante riñas, desórdenes o amotinamientos.

IV. Consideraciones finales

Los muros de las cárceles solo limitan físicamente a la persona de sus redes delictuales y la actividad ilícita. Es por ello, que no es de extrañar que en gran medida la realidad de un recinto penal, refleje también la realidad del barrio; y que determinados espacios de los recintos penales, en algunas ocasiones, sean empleados como centros neurálgicos de coordinación de distintas acciones ilícitas. Es por ello, que hoy se hace imperioso considerar la cuestión penitenciaria en el circuito de seguridad pública.

Otro elemento significativo del fenómeno, es el uso de la violencia en la comisión de delitos, el control territorial en los barrios y –como se indicó– el ejercicio de poder sobre los más débiles, quienes son reclutados para los efectos delictivos y criminales. Este mismo ejercicio se enfrenta en las cárceles. A su vez, la mutación y perfeccionamiento en la comisión de delitos en los recintos penitenciarios, el liderazgo y poder adquisitivo; permite a estas organizaciones ejercer ascendencia sobre otros, con una búsqueda incesante de una hegemonía o predominio del negocio, utilizando para ello también la violencia, la intimidación y la muerte, o en su efecto, generando alianzas para hacer del delito, una condición de mayor beneficio monetario o *confort*. Por otro lado, está presente la corrupción de algunos agentes penitenciarios, con la intención de generar verdaderos *Centros de Negocios* dentro de la cárcel, a través de la planificación, logística, reclutamiento y conducción operativa de todo tipo de actividades lucrativas ilícitas propias de esta delincuencia estructurada.

El porcentaje de privados de libertad que reconocen haber consumido algún tipo de droga al momento de ingresar a una cárcel es de un 82%, cifra que viene a confirmar, por una parte, la prevalencia de drogas en la comisión de delitos, y por otra, que dicho fenómeno es altamente entendible dada la masificación del ingreso de dichas sustancias al interior de las cárceles, lugar en que se radica un *mercado cautivo*, no tratado médicamente, y en donde además el gramo de droga tiene un precio de siete u ocho veces que el valor *convencional*, es decir, se margina mucho más y los riesgos son mínimos.

Gendarmería de Chile ofrece una propuesta que pretende reorientar la mirada del trabajo penitenciario, atendiendo a los cambios que vienen ocurriendo, principalmente asociados al ingreso de miembros de organizaciones delictivas territoriales, fundamentalmente ligadas al narcotráfico, que no detentan metas políticas, son jerarquizadas, constituyen una subcultura única, se perpetúan a sí mismas en el tiempo, exhiben una disposición a usar la violencia ilegal, son de carácter monopolístico por lo cual evitan o combaten la competencia y se rigen por reglas explícitas entre sus miembros. Sus “dos principales objetivos son dinero y poder” (Howard Abadinsky 2010 en *Organized Crime*). Su permanencia en el tiempo “se mantiene a través del uso de la fuerza, las amenazas, el control monopolístico y/o la corrupción de los funcionarios públicos” (Jay Albanese 2007 en *Organized Crime in our times*).

En este sentido, se ha hecho necesario definir y/o modificar nuevos y actuales preceptos, que ayuden a regular la convivencia al interior de los penales, considerando que el perfil de cada interno(a) se debe adecuar a un determinado recinto penitenciario que cuente con las condiciones para albergarlo, según sus datos e información socio criminógena y principalmente por su riesgo de reincidencia, evitando replicar los modelos externos – que traen desde el medio libre – al interior de los recintos, minimizando, incluso neutralizando la perpetuación de conductas que afecten a sus pares de menor ascendencia delictual e impidiendo el contacto con símiles criminógenos que puedan servir como un potenciador de conductas que desencadenen en hechos que vaticinen alteraciones del normal funcionamiento de los establecimientos.

En todo este escenario, resulta del todo necesario fortalecer la derivación de líderes de bandas criminales, a internos altamente refractarios que mantienen predominio sobre otros reclusos sometidos a sus pretensiones, de alto compromiso delictual, y otros de connotación y de riesgo para la seguridad pública; a sectores o Unidades Penales con un *RÉGIMEN DIFERENCIADO DE RECLUSIÓN*, que también permita sostener, en términos prospectivos, un proceso específico de *INTERVENCIÓN*. Así las cosas, un régimen diferenciado de estas características, además de ofrecer alternativas de segmentación, permite mantener una vigilancia y custodia que propenda a la seguridad de los propios reclusos, del resto de la población penal, del personal, y por sobre todo, de la misma ciudadanía; teniendo como objetivos centrales reducir los riesgos de evasión, conflictividad interna y de reincidencia delictual, facilitando la integración social de las personas privadas de libertad permeables y voluntarios para acogerse a los programas de inserción de Gendarmería de Chile.

Una de las estrategias más gravosas de las organizaciones criminales en contra la gobernanza estatal, sus instituciones y órganos, radica principalmente –además del aumento y control patrimonial, hegemonía del poder y dinamismo de centros de negocios ilícitos- en obtener mayor capacidad de corrupción de las instituciones y agentes públicos mediante el soborno o la intimidación, y la penetración y socavamiento de sus principios; por lo que refrendar la doctrina y principios fundamentales de tales instituciones, resulta trascendental para enfrentar dicho flagelo.

El dinamismo de las estrategias delictuales, debe ser confrontado asimétricamente con la inyección de nuevas tecnologías, infraestructura física y tácticas investigativas, y fortalecimiento de la investigación criminal y de inteligencia penitenciaria, dada la condición de criticidad de los establecimientos penitenciarios y sus procesos, resultando necesaria la existencia de una política de Estado sostenida y contundente, que permita, más allá de la sobrevivencia institucional, enfrentar eficientemente el fenómeno de la delincuencia organizada en las Cárceles.

Gendarmería de Chile asume la responsabilidad y el desafío que implica reflexionar y actuar con oportunidad, en el entendido que “el fenómeno de la criminalidad organizada atenta directamente contra la base misma de la democracia” (Kazyrytskyi 2012) y que resulta un imperativo enfrentarla para defender los valores en los que se cimienta nuestra sociedad. El necesario trabajo integrado de todas las Instituciones y órganos del Estado en pos de este propósito, es el gran desafío que el País se merece.